

**SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**  
Medellín, veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021)

**SENTENCIA**

Magistrada Ponente: María Eugenia Gómez Velásquez

<b>Proceso</b>	: Ordinario de Segunda Instancia
<b>Demandante</b>	: <b>JOSÉ DEL CARMEN SOTO MATEUS</b>
<b>Demandado</b>	: <b>ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES</b>
<b>Radicado</b>	: <b>05001 31 05 013 2018 00198 01</b>
<b>Providencia</b>	: Sentencia
<b>Temas y Subtemas</b>	: Seguridad Social, reajuste pensión vejez sumando tiempos públicos y privados, incrementos pensionales por cónyuge a cargo
<b>Decisión</b>	: Confirma Sentencia absolutoria de Primera Instancia
<b>Sentencia No</b>	: 012

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, profieren la siguiente decisión de fondo, previa deliberación, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 806 del 4 de junio de 2020, *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

## ANTECEDENTES

### Pretensiones:

Se solicita se condene al reconocimiento y pago de **reajuste de la pensión de vejez, aplicando el 90%** como tasa de reemplazo, según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 concordado con el Decreto 758 de 1990 y Sentencia SU 769 de 2014; **incrementos pensionales del 14%** por tener cónyuge a cargo; indexación, costas procesales.

### Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma que el demandante nació el 19 de octubre de 1948 y al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad; **el I.S.S. le reconoció pensión de vejez mediante Resolución No 015301 del 15 de junio de 2011**, en aplicación del artículo 9º de la **Ley 797 de 2003**, con ingreso base de liquidación (IBL) de **\$965.411, tasa del 73.45% y mesada en cuantía de \$709.094, a partir del 19 de octubre de 2008. Prestó servicios a la Policía Nacional del 27 de junio de 1969 al 23 de enero de 1985**, que sumado al tiempo cotizado, equivale a **1457.29** semanas. Convive con su cónyuge Flormorena Salas de Soto, quien depende de él, no labora, no recibe rentas, ni pensión.

### Respuesta a la demanda:

**COLPENSIONES** aceptó lo referente al reconocimiento y reliquidación de la pensión de vejez reconocida; se opuso a la prosperidad de las pretensiones; propuso las excepciones denominadas de inexistencia de la obligación, buena fe, compensación indexada, prescripción, imposibilidad de condena en costas, innominada (folios 35 a 36).

### **Sentencia de Primera Instancia:**

El **Juzgado Trece Laboral** del Circuito de Medellín, **absolvió a COLPENSIONES de todas las pretensiones** formuladas en su contra; no impuso condena en costas.

**Consideraciones del Juzgado:** En términos generales explicó que conforme a Sentencia SU 769 de 2014, es posible tener en cuenta el tiempo de servicio público para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, mas no para su reliquidación; que el tiempo de servicio público sin cotización fue prestado a la Policía Nacional tratándose de un régimen exceptuado, no habiendo lugar a adoptar medidas constitucionales al no advertirse vulneración a derechos fundamentales y que la pensión de vejez del demandante ya fue reliquidada por parte de COLPENSIONES, sumando los tiempos públicos y privados, conforme a la Ley 797 de 2003. Respecto a la pretensión de incrementos pensionales por cónyuge a cargo, concluyó que no es procedente, por cuanto perdieron vigencia a partir del 1º de abril de 1994 y el demandante no fue destinatario del Acuerdo 049 de 1990, causándose su pensión de vejez en el año 2008 en vigencia del Sistema General de Pensiones, citando el precedente de la H. Corte Constitucional en Sentencia SU 140 de 2019, según lo conocido en comunicado de prensa.

### **Recurso de Apelación apoderado del demandante:**

Sostiene que la ratio decidendi de la Sentencia SU 769 de 2014 no corresponde a la indicada por el Juzgado, que la SU 057 de 2018 contempla los parámetros de la primera, aclarando que a cualquier pensionado que acceda al reconocimiento en virtud del régimen de transición solo se le deben exigir las semanas, el tiempo y el monto del régimen anterior, las demás condiciones, incluyendo la sumatoria de tiempos públicos y privados, deben ser las contempladas en la Ley 100 de 1993 que lo permite; precedente que prevalece y debe ser acogido; **solicita se revoque la Sentencia y en su lugar, se acceda a la**

**sumatoria de tiempos públicos y privados**, siendo la reliquidación un aspecto intrascendente, puesto que desde el reconocimiento se debe garantizar el mínimo vital, que no necesariamente debe ser el establecido en la norma, sino el que garantice una estabilidad económica digna conforme a las cotizaciones efectuadas, que en este caso resulta ser el Decreto 758 de 1990 en virtud del principio de favorabilidad.

Respecto a la **vigencia de los incrementos pensionales**, afirma que la postura vigente es que el pensionado haya sido beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y Decreto 758 de 1990, debiendo **acogerse la pretensión por tener el demandante a cargo a su cónyuge**; afirma que un comunicado de prensa no sustituye una notificación, no goza de fuerza jurídica, ni tiene fuerza vinculante, por lo que se debe esperar el conocimiento de la Sentencia SU 140 de 2019.

### **Alegatos de conclusión:**

La apoderada de **COLPENSIONES** expone en términos generales, que no es procedente acceder a la pretensión de reconocer la pensión de vejez, teniendo en cuenta el Decreto 758 de 1990 y la Sentencia SU-769 de 2014, porque el demandante cumplió su edad de estatus pensional el 19 de octubre de 2008, con anterioridad a la regla de aplicación establecida por la jurisprudencia citada.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

### **CONSIDERACIONES**

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **Apelación**, de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente.

### **Conflicto jurídico:**

El conflicto jurídico a dirimir, radica en determinar si hay lugar a revocar la **Sentencia de Primera Instancia**, analizándose si es procedente sumatoria de tiempo de servicio público prestado a la Policía Nacional y semanas cotizadas, para reliquidación de la pensión de vejez como beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 concordado con el Decreto 758 de 1990, aplicándose una tasa de reemplazo del 90%; así mismo, si el demandante tiene derecho a incrementos pensionales por tener cónyuge a cargo.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente confirmar la **Sentencia de Primera Instancia**; por las siguientes razones:

1) En cuanto a la procedencia de sumar tiempos de servicio público y cotizaciones al Sistema de Pensiones, para obtener la reliquidación de la pensión de vejez, aplicando el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 concordado con el Decreto 758 de 1990:

Esta Sala de Decisión Laboral, era del criterio que lo pretendido en este asunto era improcedente, para el caso de personas que ya habían sido pensionadas en aplicación de este régimen sin necesidad de sumatoria de semanas, por otro régimen o en aplicación de otras normas<sup>1</sup>. **Criterio que fue**

---

<sup>1</sup> Acatando:

recogido por la mayoría de los integrantes de esta Sala, para en su lugar, acoger el precedente vertical de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, que a partir de la Sentencia SL1947 de 2020 Radicación 70918, ante un nuevo estudio del asunto, modificó el anterior precedente jurisprudencial, para indicar que las pensiones de vejez contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy COLPENSIONES, y los tiempos laborados a entidades públicas, lo cual fue reiterado en SL1981 de 2020, SL2557 de 2020, SL2523 de 2020, SL2659 de 2020, SL3220 de 2020, SL4392 de 2020. Es así como en Sentencia SL2557 de 2020 señaló que tal criterio jurisprudencial también es aplicable cuando se reclama la reliquidación de la pensión de vejez; en los siguientes términos:

*“...conforme al Acuerdo 049 de 1990 es viable acumular los tiempos de servicios públicos que cotizó la actora a otras cajas de previsión del sector público a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en dicho reglamento.*

*De modo que tal criterio jurisprudencial también es aplicable al asunto en controversia, esto es, a la reliquidación de la pensión de vejez de la demandante...”*

---

a) Lo reiterado por la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, quien con posterioridad a la Sentencia SU 769 del 16 de octubre de 2014, ha señalado subreglas a tener en cuenta en estos casos, aplicando dicha sumatoria de tiempos solo de manera residual, esto es, en últimas cuando la persona no cuenta con otra posibilidad para pensionarse; por ser la postura que más se ajusta a la Constitución y a los principios de favorabilidad y pro homine, maximizando la garantía del derecho fundamental a la seguridad social. Lo anterior tratado entre otras, en las Sentencias T 508 de 2017, T 090 de 2018, T 207 A de 2018, SU 057 de 2018, T 441 del 8 de noviembre de 2018.

b) Dándose aplicación a los principio de igualdad y seguridad jurídica, dado que era la tesis mayoritaria de la Sala Laboral de este Tribunal, además que la Sala de Casación Laboral de H. Corte Suprema de Justicia, tenía establecido que no procedía tal sumatoria de tiempos públicos y privados para efectos de pensiones reconocidas en la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, concordado con el Decreto 758 de 1990, por cuanto las normas del entonces I.S.S. hoy Liquidado consagran el reconocimiento de la pensión de vejez solo teniendo en cuenta las cotizaciones realizadas a dicha entidad y que tal acumulación se permite solo en aplicación de la Ley 100 de 1993 –y sus posteriores modificaciones- o para efectos de aplicación de la pensión por aportes, consagrada en el artículo 7° de la Ley 71 de 1988; ver Sentencias SL317 de 2019 Radicado 60346, SL5514 de 2018 Radicado 58732, SL032 de 2018 Radicado 57571, entre otras<sup>1</sup>.

Y la H. Corte Constitucional en Sentencias como SU 298 de 2015 y T–109 de 2019, indicó que en los eventos en que existen dos precedentes, uno de la jurisdicción especializada y otro de la constitucional, es el precedente constitucional, el que debe irradiar la doctrina de las demás jurisdicciones, en virtud del principio de supremacía constitucional, que tiene carácter vinculante, no solo en forma vertical, sino también para los órganos de cierre de las demás jurisdicciones.

**En el asunto bajo estudio, no se cumplen los presupuestos para la procedencia de sumatoria de tiempos de servicio público y cotizaciones al Sistema de Pensiones**, con el fin de obtener la reliquidación de la pensión de vejez del demandante, en aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 concordado con el Decreto 758 de 1990; toda vez que, **el tiempo de servicio público** que se solicita tener en cuenta, **fue prestado a la Policía Nacional** (del 27 de junio de 1969 al 23 de enero de 1985 folio 10) y **conforme al artículo 279 de la Ley 100 de 1993, el Sistema Integral de Seguridad Social contenido en dicha Ley**, del cual hacen parte los beneficiarios del citado régimen de transición, **no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional**, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. Por tanto, no hay lugar a sumar el tiempo de servicio público prestado a la Policía Nacional, por tratarse de un régimen exceptuado del Sistema Integral de Seguridad Social, lo cual fue explicado por la Juez de Primera Instancia.

**2) Respecto a los incrementos pensionales** contemplados en el **artículo 21 del Decreto 758 de 1990**, aprobatorio del Acuerdo 049 del mismo año; sostiene el recurrente que *debe acogerse la pretensión por tener el demandante a cargo a su cónyuge; afirma que un comunicado de prensa no sustituye una notificación, ni tiene fuerza vinculante, por lo que se debe esperar el conocimiento de la Sentencia SU 140 de 2019*. Al respecto tenemos que:

La citada norma prescribe que las pensiones de invalidez de origen común y las de vejez, se incrementarán en un **14%** sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero (a) del beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de una pensión.

Sobre este tema, **la H. Corte Constitucional mediante Sentencia SU**

140 del 28 de marzo 2019<sup>2</sup>, indicó que dichos incrementos pensionales desaparecieron del mundo jurídico con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y solo conservan efectos ultractivos, a favor de quienes se hicieron a ellos mientras estuvieron vigentes, siempre y cuando, mantengan las condiciones requeridas; dejando claro que el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 no produce efecto alguno respecto de quienes hayan adquirido el derecho a la pensión de vejez con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993; veamos apartes de la citada Sentencia:

*“...Para la corte es innegable entonces que el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 no produce efecto alguno respecto de quienes hayan adquirido el derecho a pensión con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993; todo ello sin perjuicio de que, con arreglo al respeto que la Carta Política exige para los derechos adquiridos, quienes se hayan pensionado con anterioridad a la expedición de la Ley 100 y hayan en ese momento cumplido con los presupuestos de la norma, conserven el derecho de incremento pensional que se les llegó a reconocer y de que ya venían disfrutando, siempre y cuando mantengan las condiciones requeridas por el referido artículo 21.*

*Lo expuesto hasta el momento es suficiente para que la Corte no vacile en sostener que desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, los incrementos previstos por el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 desaparecieron del mundo jurídico y solo conservan efectos ultractivos para aquellos que se hicieron a ellos durante la vigencia de los mismos...”.*

Conforme a lo anterior, **esta Sala de Decisión Laboral** cambió su **postura sobre el tema**, atendiendo a que la **H. Corte Constitucional** en la Sentencia **T-109 de 2019**, precisó que **el precedente constitucional tiene “...carácter vinculante, no solo en forma vertical** (respecto de todos los jueces que conforman la jurisdicción constitucional), **sino también para los órganos de cierre de las demás jurisdicciones** que, en aras del principio de supremacía constitucional, deben procurar por una lectura sistemática del derecho, la cual comprende la interpretación auténtica de la Constitución, que se encuentra a cargo de la Corte”.

Así mismo, en **Sentencia SU 298 de 2015**, señaló que **“...es el precedente constitucional**, por ser producto de la interpretación autorizada de la Constitución, que es norma de normas, **el que debe irradiar la doctrina de las demás jurisdicciones**. En virtud del principio de supremacía constitucional, los jueces y las autoridades administrativas en

---

<sup>2</sup> Publicada en el portal web de la Corporación:  
[https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/SU140-19.htm#\\_ftn2](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/SU140-19.htm#_ftn2)



*su labor de aplicación del ordenamiento jurídico deben dar prevalencia a los postulados constitucionales cuyo contenido está expuesto no sólo por la literalidad de las normas, sino por la interpretación que de ellas hace la Corte Constitucional...”.*

**No desconociendo la Sala que con relación a este asunto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia<sup>3</sup>**, indicó que el beneficio de **los incrementos pensionales por personas a cargo** consagrados en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobados por el Decreto 758 del mismo año, **conservan su vigencia**, en favor de quienes se les aplicó directamente el Acuerdo 049 de 1990 o a través del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, posición que se había compartido de tiempo atrás.

Además, el **Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo<sup>4</sup>**, en demanda de nulidad contra los artículos 21 y 22 del Decreto 758 de 1990, señaló que estaban vigentes los incrementos pensionales por personas a cargo.

En consecuencia, **en el presente asunto no hay lugar al reconocimiento y pago de incrementos pensionales por personas a cargo**, contemplados en el literal b) del artículo 21 del Decreto 758 de 1990, toda vez que **la pensión de vejez** del demandante reconocida mediante Resolución No 015301 de 2011, **se causó el 19 de octubre de 2008**, al cumplir la edad de 60 años, esto es, cuando estaba en vigencia el Sistema General de Pensiones, siendo aplicable lo indicado en la Sentencia SU 140 de 2019, tal como concluyó la Juez de conocimiento.

---

<sup>3</sup> **Sentencias SL14777 del 13 de septiembre de 2017** Radicación No 52693 M.P. doctora Jimena Isabel Godoy Fajardo, **Radicación 36036 del 23 de abril de 2014** M.P. doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo; **Radicación 29731, 29531 del 5 de diciembre de 2007** M.P. doctor Luis Javier Osorio López, entre otras

<sup>4</sup> Sección Segunda – Subsección A, el 16 de noviembre de 2017, con ponencia del Doctor Gabriel Valbuena Hernández, donde al denegar las suplicas de la demanda de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, propuesta por el Instituto de Seguros Sociales frente a los artículos 21 y 22 del Decreto 758 de 1990, determinó que: “...de conformidad con los derechos y los principios que consagra la Constitución Política en lo que atañe a los derechos laborales, que están orientados a que no se desconozcan o lesionen las situaciones jurídicas consolidadas conforme a la norma anterior, con el fin de que impere el respeto por los derechos adquiridos; se debe tener en cuenta, que los incrementos por personas a cargo que en el pasado fueron establecidos por el Consejo Nacional del Instituto de Seguros Sociales a través de los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990, aún permanecen vigentes como parte integrante del régimen de transición que

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, **confirmar** la Sentencia de Primera Instancia, incluyendo lo relativo a la condena en costas.

### **COSTAS:**

**Se condenará en costas en esta Segunda Instancia** a cargo del demandante José del Carmen Soto Mateus, al no haber prosperado el recurso de Apelación, fijándose como agencias en derecho un (1) SMLMV equivalente a \$908.526 a favor de COLPENSIONES, conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

### **DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO:** Se **CONFIRMA** la **Sentencia** de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de **Apelación** se revisa, incluyendo lo relativo a la condena en Costas; según lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

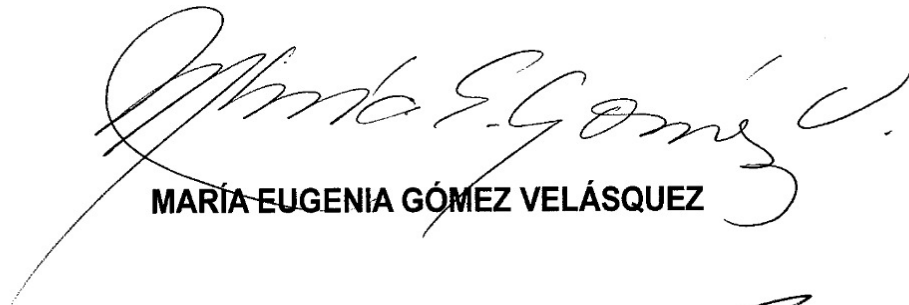
**SEGUNDO:** Se **condena en Costas** en esta **Segunda Instancia**, a cargo del demandante José del Carmen Soto Mateus, fijándose como agencias en derecho un (1) SMLMV equivalente a \$908.526 a favor de COLPENSIONES; según lo indicado en la parte motiva.

---

*estableció la Ley 100 de 1993 en su artículo 36.*

**TERCERO:** Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** (electrónicos de que trata el artículo 9º del Decreto Legislativo 806 de 2020) y se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.

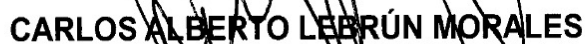
**Los Magistrados,**



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**



**NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR**



**CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -  
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
Estados No. **015** del **01 de febrero de 2021**.

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>